

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados, Presos Políticos, Exiliados y Relegados, nos hemos reunido hoy aquí en el Palacio de Justicia, para dirigirnos al pueblo chileno desde un lugar al que tantas veces hemos llegado en busca de justicia, encontrando sólo pasividad, indiferencia, o complacencia con los actos delictuales represivos de los organismos de seguridad del Gobierno.

El objeto de esta manifestación es expresar públicamente nuestro más enérgico y categórico rechazo a la convocatoria de plebiscito formulada por el General Pinochet. No podemos callar ante tal hecho. La permanente y sistemática violación de Derechos Humanos en nuestra Patria durante estos 7 años de Gobierno Militar, nos obliga a denunciar lo que ha significado como costo a este pueblo el terrorismo institucional, con su secuela de cientos de muertos, miles y miles de exiliados, cientos de relegados, una cifra incalculable de detenidos sometidos a brutales torturas -situación que aún se mantiene con los presos políticos que permanecen recluidos en las cárceles o comisarías del país - y las acusadoras listas de detenidos desaparecidos por quienes aún el Gobierno no entrega una respuesta por su situación.

La violencia y el terrorismo institucional se han entronizado durante todos estos años en la sociedad chilena, como práctica de Gobierno contra la disidencia política.

Nunca antes en Chile, en su historia independiente, se había vivido la existencia de cuerpos de seguridad, destinados a reprimir a la población estandoles permitido la tortura y el asesinato como medios para sus objetivos de represión.

Nunca antes en Chile habíamos conocido que agentes de seguridad o de los servicios de Investigaciones, gozarán de la más absoluta impunidad para cometer actuaciones delictuales e ilegítimas, y que aún más contarán con el respaldo y amparo estatal que los esconde en el anonimato, o que justifica públicamente sus actos tergiversando los hechos si es necesario.

Tampoco nunca antes el país había vivido tan largo período de anormalidad jurídica como lo son estos 7 años, en que se ha ido renovando periódicamente el estado de emergencia. El régimen no da más, hay que legalizarlo, de ahí que hoy se quiere convertir legalmente en normal lo que hasta ayer era anormal, estructurando para ello un proyecto constitucional que busca formalmente institucionalizar las prácticas que denunciemos.

Nosotros lo decimos claramente, y sabemos que es la gran aspiración de todo el pueblo, no queremos más a este Gobierno, que se sustenta en la fuerza y en la violencia para ahogar las aspiraciones libertarias y democráticas de todos. Que ante su incapacidad para satisfacer las más elementales demandas populares no vacila en poner en práctica hasta los más repudiables métodos represivos para conseguir sus objetivos. No podemos aceptar que se pretenda institucionalizar para siempre lo que es ilegítimo y atentatorio a los Derechos de cada hombre y mujer, y a los intereses de la Patria.

El acto plebiscitario al cual se convoca es ilegítimo por muchas razones, entre otras, por la falta absoluta de garantías, no sólo del Derecho de opinar, de reunirnos o de asociarnos, sino que también porque deja las puertas abiertas al fraude al no existir registros electorales ni controles efectivos en los recuentos de votos. Pero aún más el pueblo se pregunta ¿con que autoridad moral y política nos convocan a un plebiscito quienes aún no asumen su responsabilidad por los delitos y crímenes cometidos en contra del pueblo?

El proyecto constitucional que se somete a la consideración nacional, es un proyecto elaborado al margen de toda participación ciudadana. Se lo postula sin otra alternativa, despreciando así la alternativa a que el pueblo aspira y coincide: la alternativa de la libertad y de la democracia, de paz y seguridad, que garantice los Derechos individuales y sociales de todos, y establezca los límites de la autoridad en el ejercicio del poder.

Se convoca a pronunciarse por un proyecto constitucional personal y dictatorial, que es garante de la vigencia de un modelo económico, político y social, de capitalismo ultraliberal, que claramente busca enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías. Modelo económico que ha demostrado su absoluta incapacidad para resolver los graves problemas de la población, y que por ello requiere de un fuerte aparato represivo para imponerse.

Por todo lo dicho es que las Agrupaciones de Familiares declaramos: Que este Gobierno encabezado por el General Pinochet, no representa al pueblo. Los intereses de libertad, democracia, paz y seguridad para todos la ciudadanía requieren de otro Gobierno, con otros hombres, civiles o uniformados exentos de reponsabilidad en los actos represivos y en las políticas de terror estatal.

Chile y los chilenos seguiremos luchando por nuestra libertad por el tiempo que sea necesario hasta conseguirla.